**Aplicación de las Necesidades de los Adultos Mayores
recopiladas
en el
"Anteproyecto de Ley de Reclamación de Manutención
Para Padres y Madres"**

Resumen del Anteproyecto de ley:

EL Ante-proyecto de ley de Reclamación de Manutención para Padres y madres establece lo siguiente:

1- Se establece la obligación de orden público y de interés general de los hijos(as) frente a su padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, que haya o hayan perdido la capacidad de sostenerse por sí mismo(s), de acuerdo los medios de que pueda disponer el hijo o hija mayor de edad.

Las necesidades a cubrir son:

- a. Alimento
- b. Albergue
- c. Vestimenta
- d. Atención médica
- e. Medicinas

2. Tendrán derecho a demandar el padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, así como aquellos tutores y padres de crianza que hayan recibido en su casa y criado como si fuere su hijo, proveyendo para su manutención, sin haber recibido ningún tipo de pago o remuneración por esta acción. Previa autorización, dada por un tribunal competente.

3. Se establece que el incumplimiento de estas obligaciones alimentaria por parte de los hijos o hijas da lugar a interponer una demanda por ante las autoridades competentes: el Fiscalizador del Juzgado de Paz del lugar de residencia del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados.

4. Si el padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, no puedan realizar la reclamación de manutención por sí mismo en razón de su estado de salud, física o mental, el Fiscalizador(a) podrá solicitar de una de las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro reconocidas, dedicadas a velar o mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que presente reclamaciones de esta naturaleza y asumir la representación del o la adulto mayor que no se encuentre en capacidad de hacerlo por sí mismo(a).

5. El proceso de reclamación de manutención para padres y madres necesitados inicia:

- a. **Denuncia de necesidad extrema de padre o madre, o adulto mayor.**
- b. **Conciliación.** En un plazo no mayor de 10 días. con la fase conciliatoria, el Fiscalizador (a), podrá de oficio constatar la veracidad de los hechos. Homologación acuerdo por Juzgado de Paz de la esa jurisdicción.
- c. **Proceso de Investigación.** Fiscalizador tiene plazo de 10 días para investigar.

d. **Demanda.** Apoderamiento Juez de Paz, quien luego ponderar los documentos aportados, interrogará a cada parte, determinará el monto de manutención a pagar por los demás hijos(as).

6. Para fijar el monto de la manutención en el proceso, el juez(a) o el Fiscalizador(a) podrá solicitar al hijo(a) demandado(a), una certificación de sus ingresos o salarios expedida por el empleador, copia de la última declaración de impuesto sobre la renta o, en su defecto, una declaración jurada de ingresos.

7. Para los fines de esta ley, es permitida la investigación de paternidad y/o maternidad, así como cualquier prueba relativo a la filiación o a la vinculación entre padres e hijo(a) sanguíneos o de crianza.

8. El juez podrá ordenar una manutención provisional si existiera necesidad extrema del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores.

9. Si el hijo(a) demandado(a) justifica que no puede pagar la manutención de su padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, el tribunal, con conocimiento de causa, ordenará que reciba en su casa y en ella, alimento y sostenga al demandante.

10. La sentencia será considerada contradictoria, no será objeto del recurso de oposición y el recurso de apelación no es suspensivo de la ejecución de la sentencia.

11. Cuando el hijo o hija obligado a pagar la manutención fuere asalariado, el demandante o el Fiscalizador(a) notificará, por acto de alguacil, la sentencia al empleador(a), para que descuente el importe de la misma, sin que dicha cantidad exceda mensualmente del veinte por ciento (20%) del salario.

12. El hijo o hija que faltare a las obligaciones de manutención o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa después de haber sido requerido para ello, podrá ser condenado a una pena de hasta un (1) año de prisión correccional que se suspende cuando cumpla con sus obligaciones.

ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE RECLAMACION DE MANUTENCIÓN PARA PADRES Y MADRES

Considerando Primero, que la Constitución de la República Dominicana en su artículo 57 establece que: “la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

Considerando Segundo, que en 2007 la República Dominicana reafirmó la Declaración de Brasilia sobre Envejecimiento de América Latina y el Caribe, adoptada en el 2003, que reafirma el compromiso de los Estados Miembros de la CEPAL de “no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y recomienda la elaboración de legislaciones específicas que definan y protejan estos derechos de conformidad con los estándares internacionales y la normativa aceptada por los Estados al respecto.

Considerando Tercero, que la Organización Mundial de la Salud (OMS-2002) promovió la aprobación de la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores considerada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Plan de acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y saludable.

Considerando Cuarto, que el adulto mayor es amparado como ser humano igual en derechos a todos los demás integrantes de la sociedad, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25, numeral 1), el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas No. 40/30 de 29-11-85, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas No. 44/77 de 8-12-89, y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en su Informe Final (Doc. A/CONF.17/13 de 18-10-94),

Considerando Quinto, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que el actual contexto de cambio demográfico a nivel mundial con tendencia al envejecimiento de la población debe garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores, creando las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que permitan su desarrollo íntegro.

Considerando Sexto, que a partir de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, de 1991, República Dominicana normó los derechos de este grupo social en la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente que en su Artículo 3 consagra que: “El y la envejeciente tienen derecho a permanecer en su núcleo familiar. Su familia deberá brindarle el cuidado necesario y procurará que su estadía sea lo más placentera posible...y por orden de prioridad, en el hogar de sus

hijos o hijas. A falta de ellos, por ausencia o fallecimiento, la responsabilidad recaerá sobre sus nietos o nietas o sus hermanos o hermanas”.

Considerando Séptimo, las obligaciones que nacen del matrimonio, reguladas en el Capítulo V, del Código Civil Dominicano, en sus artículos 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211. En efecto, el Art. 205 establece que: “Los hijos están obligados a alimentar a sus padres y ascendientes necesitados”. Art. 206 establece que: “Los yernos y nueras están igualmente obligados a prestar alimentos, en análogas circunstancias a sus padres políticos, pero esta obligación cesa: Primero: Cuando la madre política haya contraído segundas nupcias. Segundo: Cuando hayan muerto el cónyuge que producía la afinidad y los hijos tenidos de su nuevo matrimonio”. El Art. 207 establece que: “Las obligaciones que resultaren de los anteriores preceptos, son recíprocas”. El Art. 208 establece que: “Los alimentos no se acuerdan sino en proporción a la necesidad del que los reclama, y a la fortuna del que debe suministrarlos”. El Art. 209 establece que: “Cuando haya cesado la necesidad de obtener alimentos en todo o en parte, o no pueda darlos el obligado a ello, puede pedirse la reducción o cesación”. El Art. 210 establece que: “Si la persona que debe proporcionar los alimentos, justifica que no puede pagar la pensión alimenticia, el Tribunal, con conocimiento de causa, ordenará que reciba en su casa y en ella alimente y sostenga a aquél a quien los alimentos se deban”.

Considerando Octavo, que la Ley 1-12, del 25 de Enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, constituye el fundamento conceptual de las políticas públicas que se aplicarán durante los años de vigencia, en su objetivo específico 2.2.3 contempla la necesidad de: “Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01”.

Considerando Noveno, que entre 1950 y 2000 la población mundial de adultos mayores ha aumentado de 200 millones a 550 millones, y que para el año 2020 se prevé una cifra no menor de 1.000 millones; que para el año 2050, previsiblemente la relación entre el grupo de los adultos mayores y la población total será de 4 a 1 en los países desarrollados; y que para el año 2025, tendrán un 71 por ciento de la población mundial de adultos mayores; alterando el equilibrio social en su conjunto.

Considerando Décimo, que el envejecimiento global tendrá hondas repercusiones en la relación entre productividad económica y gasto social, y que afectará no sólo al grupo de las personas de edad, sino que se convierten en una carga social estatal, por las altas tasas de sus necesidades de salud, alimento y atenciones especiales.

Considerando Undécimo, que por efecto de los fenómenos de la urbanización, la industrialización, y la transición del predominio de la familia grande multigeneracional al predominio de la familia nuclear bigeneracional, hoy en día los adultos mayores se encuentran menos protegidos e integrados familiarmente que en épocas pasadas, rompiéndose así el ciclo natural de protección familiar.

Considerando Duodécimo, el indiscutible aporte de los adultos mayores en la genética, principios y valores familiares, que han incidido directamente en la formación de todos los descendientes pertenecientes a un mismo núcleo familiar.

Considerando Décimo Tercero, que los adultos mayores sin duda continúan sufriendo discriminaciones etarias, siendo considerados en muchos casos como un sector poblacional negligible que requiere costos crecientes para una inversión social que no tendrá condiciones de revertirse a la sociedad.

Considerando Décimo Cuarto, el evidente desamparo y desprotección que sufren los padres y madres adultos mayores con necesidades económicas ante la negligencia de sus hijos o descendientes, quienes muestran poca sensibilidad, individualismo en su accionar y ausencia de la obligatoriedad de responsabilidad natural de protección a sus ascendientes, urge la aprobación de la Ley de Reclamación de Manutención de Padres a Hijos.

Vista: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del 2010.

Visto: El Código Civil de la República Dominicana.

Vista: Resolución No.730 de fecha 22 de noviembre del 1969, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la resolución de la Asamblea General 217 A (ii) del 10 de diciembre de 1948.

Vista: La Ley No.352-98 de fecha 15 de agosto de 1998, sobre Protección de la Persona Envejeciente.

Vista: La Ley General de Salud, No.42-01 de fecha 8 de marzo de 2001.

Vista: La Ley No.87-01 de fecha 9 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Vista: La Ley No.1-12 de fecha del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Visto: El Decreto No.1372-04 de fecha 25 de octubre de 2004, que aprueba el Reglamento para la Aplicación de la Ley No.352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente.

Visto: El Decreto No.1554-04 de fecha del 13 de diciembre de 2004, que establece el Programa de Protección Social, con el propósito de proteger los riesgos a la población de pobreza extrema y a la población en situación de vulnerabilidad social.

Visto: El Decreto No.2213 de fecha 17 de abril del 1884, que se adopta como ley el Código Civil Francés traducido y adecuado a nuestra legislación, Código Civil de la República Dominicana.

Visto: El Decreto No.2274 de fecha 20 de agosto de 1884, que se adopta como ley el Código Penal Francés traducido y adecuado a nuestra legislación, Código Penal de la República Dominicana.

Visto: El Plan de Acción sobre la Salud de las Personas Mayores de fecha 28 de Septiembre al 2 de octubre del 2009, incluido el Envejecimiento Activo y Saludable, adoptado en la 61ª. Sesión del Comité Regional de la Organización Panamericana de la Salud.

Vistas: Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas durante la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada del 4 al 6 del mes de marzo de 2008, en Brasilia, Brasil;

Vista: La Declaración de Brasilia adoptada durante la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina y el Caribe, celebrada del 4 al 6 de diciembre del 2007, en Brasilia, Brasil;

Vista: La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptada durante la Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, celebrada del 19 al 21 de noviembre del 2003, en Santiago de Chile;

Vista: La Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado por los Estados Miembros de la ONU durante la segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, celebrada del 8 al 12 de abril de 2002, en Madrid, España, aprobados mediante la Resolución A/57/167 de fecha 18 de diciembre de 2002;

Vista: La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud, de fecha 17 de noviembre de 2002;

Visto: El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, adoptado por los Estados Miembros de la ONU durante la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada del 26 de Julio al 6 de Agosto de 1982 en Viena, Austria, y aprobado mediante la Resolución A/RES/37/51 de fecha 3 de diciembre de 1982.

SE DICTA LA SIGUIENTE LEY SOBRE RECLAMACION DE MANUTENCIÓN PARA PADRES Y MADRES

Artículo 1. La presente ley tiene por finalidad establecer la obligación de los hijos(as) frente a su padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, que haya o hayan perdido la capacidad de sostenerse por sí mismo(s), de proporcionar alimento, vestido, albergue, atención médica y medicinas, siempre de acuerdo con las necesidades del padre, madre y ascendientes adultos mayores necesitados y en relación con los medios de que pueda disponer el hijo o hija mayor de edad. Esta obligación es de orden público y de interés social.

Párrafo I. Cuando en la familia de la que se trate haya más de uno hijo o hija, la reclamación se hará frente a todos los hijos o hijas mayores de edad del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores reclamante.

Párrafo II. Cuando haya un esposo o esposa viva en capacidad de mantener a su cónyuge la reclamación de manutención se hará conjuntamente a cónyuge e hijos(as).

Párrafo III. En caso de fallecimiento de uno o todos los hijos(as), la obligación deberá ser asumida por los descendientes de éstos en su respectiva proporción.

Párrafo IV. La obligación de manutención debe mantenerse hasta tanto la persona beneficiaria pueda sostenerse económicamente por sí misma.

Artículo 2. Tendrán derecho a demandar el padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados o la persona que detente el cuidado de éstos, previa autorización, dada por un tribunal competente.

Párrafo. Asimismo podrán ejercer la acción aquellos tutores y padres de crianza que hayan recibido en su casa y criado como si fuere su hijo, proveyendo para su manutención, sin haber recibido ningún tipo de pago o remuneración por esta acción.

Artículo 3. Cuando los hijos o hijas hayan incumplido con la obligación alimentaria para con su padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, se podrá iniciar el procedimiento para el cumplimiento de esta obligación. El mismo podrá ser iniciado por ante el Fiscalizador del Juzgado de Paz del lugar de residencia del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados.

Artículo 4. Este procedimiento de reclamación de manutención, se iniciará de manera conciliatoria por medio de citación a los hijos e hijas del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, para ser informados de la situación del o la reclamante.

Artículo 5. El requerimiento de citación indicado en el artículo anterior será realizado a solicitud de parte interesada o por denuncia que presente cualquier persona

ante el Fiscalizador(a) donde resida el padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados que haya perdido la capacidad de sostenerse por sí mismo.

Párrafo. Cuando el proceso se inicie mediante denuncia por ante el Fiscalizador(a), éste podrá de oficio constatar la veracidad de la misma y en caso de ser cierta, realizar las investigaciones de lugar a fin de citar los hijos e hijas del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, para informarles de la situación de su pariente.

Artículo 6. Cuando el padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, no puedan realizar esta acción en reclamación de manutención por sí mismo en razón de su estado de salud, física o mental, y así lo requieran del Ministerio Público personas cercanas al padre, madre y/o ascendientes adultos mayores, el Fiscalizador(a) podrá solicitar de una de las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro reconocidas, dedicadas a velar o mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que presente reclamaciones de esta naturaleza y asumir la representación del o la adulto mayor que no se encuentre en capacidad de hacerlo por sí mismo(a).

Párrafo I. El padre, madre y/o ascendientes adultos mayores en extrema necesidad y con incapacidad física o mental, podrá ser representado por una asociación sin fines de lucro reconocida, para reclamar manutención de sus hijos(as) a instancia del Fiscalizador(a) luego de obtener un certificado de autoridad médica competente de la incapacidad física o mental del reclamante.

Párrafo II. La representación del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados y con incapacidad física o mental, no se refiere exclusivamente para la reclamación de la manutención, quedando la asociación sin fines de lucro en ejercicio de salvaguardar el buen uso de estos recursos destinados a su alimentación, medicinas y otras necesidades del reclamante.

Artículo 7. Una vez presentada la denuncia, el Fiscalizador citará a las partes para efectuar la conciliación, en un plazo no mayor de diez (10) días, en la cual se ponderará la cuantía de la manutención, el lugar y la forma de su cumplimiento, la persona a la que debe hacerse el pago y demás aspectos que se estimen necesarios.

Artículo 8. En la vista de conciliación por ante el Fiscalizador(a) las partes podrán llegar a un acuerdo que será homologado por ante el Juzgado de Paz de la esa jurisdicción.

Párrafo. En caso de que las partes no llegaren a un acuerdo, Fiscalizador(a) tendrá un plazo de diez (10) días para realizar las investigaciones socioeconómicas pertinentes, en caso que sea necesario y una vez obtenido dicho informe procederá al apoderamiento del Juez de Paz, a los fines de que éste conozca sobre la demanda.

Artículo 9. La demanda introductiva podrá presentarse por escrito por ante el o la Secretario(a) del Juzgado de Paz, del lugar donde reside el padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados.

Párrafo I. Esta deberá expresar los nombres de las partes, el lugar donde se les debe notificar, el monto de la manutención que se pretende, los hechos que sirven de fundamento, las pruebas y documentaciones que se harán valer.

Párrafo II. Si faltare algún documento que el demandante no esté en posibilidad de anexar a la demanda, el o la juez, ordenará a la autoridad correspondiente que expida gratuitamente el documento y se remita al tribunal para anexarlo al expediente.

Artículo 10. Para los efectos de fijar el monto de la manutención en el proceso, el juez(a) o el Fiscalizador(a) podrá solicitar al hijo(a) demandado(a), una certificación de sus ingresos o salarios expedida por el empleador, copia de la última declaración de impuesto sobre la renta o, en su defecto, una declaración jurada de ingresos.

Artículo 11. Queda permitida la investigación de paternidad y/o maternidad para los fines de esta Ley.

Párrafo. Una posesión de estado notoria, cualquier hecho incontestable, concluyente o razonable relativo a la filiación o a la vinculación que se investigue, podría servir de prueba.

Artículo 12. A solicitud de parte interesada o del Fiscalizador(a), el juez(a) podrá ordenar que se otorgue una manutención provisional desde la admisión de la demanda, siempre y cuando los demandados sean hijos(as) nacidos dentro del matrimonio o cuya filiación haya sido aceptada por el hijo(a), si con dicha demanda aparece prueba sumaria de la capacidad económica del demandado(a) y de la existencia de la necesidad extrema del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores.

Párrafo. A requerimiento del Fiscalizador(a) o el juez(a), se dará aviso a la Dirección General de Migración y al Departamento de Impedimentos de Salida de la Procuraduría General de la República, para que el demandado(a) no pueda ausentarse del país sin otorgar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación.

Artículo 13. Si el hijo(a) demandado(a) justifica que no puede pagar la manutención de su padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, el tribunal, con conocimiento de causa, ordenará que reciba en su casa y en ella, alimento y sostenga al demandante.

Párrafo. En este caso, el tribunal determinará el monto de manutención a pagar por los demás hijos(as).

Artículo 14. El juez(a), después de ponderar los documentos aportados, interrogará a cada parte y dictará la sentencia en la misma audiencia si ello fuere posible o en otra

que fijará dentro de los seis (6) días siguientes. En esa fecha pronunciará el fallo, en audiencia pública, con o sin la presencia de las partes.

Artículo 15. La inobservancia de los plazos establecidos por esta Ley no podrá ser causa de nulidad.

Artículo 16. Una vez transcurridos diez (10) días luego de la notificación de la sentencia contentiva de la manutención, y el demandado o demandada incumple su obligación de pago de la manutención contenida en la misma, el demandante podrá solicitar al juez(a) que emitió la sentencia que ordene mediante auto ejecutorio sobre minuta, no obstante cualquier recurso, el secuestro o el embargo de los bienes muebles o inmuebles del deudor en la cantidad necesaria para la obtención del capital adeudado y su venta o remate dentro del plazo fijado por el juez(a), observando, en lo que fuere procedente, las disposiciones previstas en los artículos 48 a 58 del Código de Procedimiento Civil y sus modificaciones.

Artículo 17. La sentencia que intervenga será considerada contradictoria, comparezcan o no las partes legalmente citadas. La misma no será objeto del recurso de oposición.

Párrafo. El recurso de apelación en esta materia no es suspensivo de la ejecución de la sentencia.

Artículo 18. Cuando el hijo(a) obligado a pagar la manutención fuere asalariado, el demandante o el Fiscalizador(a) notificará, por acto de alguacil, la sentencia al empleador(a), para que descuente el importe de la misma, sin que dicha cantidad exceda mensualmente del veinte por ciento (20%) del salario.

Párrafo I. El incumplimiento de hacer el descuento de salario correspondiente convierte al empleador en responsable solidario de las cantidades no descontadas y dicho incumplimiento se castigará con una sanción equivalente a tres (3) salarios mínimos en cada caso y con el doble de esta suma en caso de reincidencia

Párrafo II. Los salarios de los empleados públicos estarán igualmente afectados por esta medida.

Artículo 19. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados en virtud de una acción anterior, fundamentada en pensión alimenticia o manutención, el juez(a) que dictó la última sentencia, a solicitud de la parte interesada, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las referidas pensiones, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios, siempre prevaleciendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 20. Cuando no fuere posible establecer el monto de los ingresos del o los demandados(as), el juez(a) podrá estimarlo tomando en cuenta su posición social y económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo oficial.

Artículo 21. El derecho de solicitar manutención por parte del padre, madre y/o ascendientes adultos mayores necesitados, no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse, cederse, ni renunciarse.

Artículo 22. El hijo(a) que faltare a las obligaciones de manutención o se negare a cumplirlas y que persista en su negativa después de haber sido requerido para ello, podrá ser condenado a una pena de hasta un (1) año de prisión correccional suspensiva.

Artículo 23. Los efectos de la condena se suspenden cuando la parte condenada cumpla con la totalidad de sus obligaciones.

Párrafo. Sin embargo, el Fiscalizador(a) o el Juez de Ejecución de Sentencia podrá suspender la prisión cuando el justiciable haya cumplido con más de la mitad del pago de la obligación establecida en la sentencia; previo acuerdo del modo de pago y las garantías de cumplimiento de la parte restante.

Artículo 24. El incumplimiento de la obligación contraída de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, dará lugar a que sea privada de la libertad de nuevo la persona que violare lo pactado. En caso de reincidencia, el justiciable no podrá beneficiarse de lo establecido anteriormente.

Artículo 25. El Fiscalizador(a) es el responsable de dar fiel ejecución a estas disposiciones, entendiendo que ellas se refieren a padres, madres y/o ascendientes adultos mayores necesitados, sin distinción de nacionalidad, siempre que residan de manera accidental o definitiva en el país.

Artículo 26. El Fiscalizador(a) realizará las diligencias pertinentes, o lo hará a pedimento de parte, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de lograr la ejecutoriedad de las sentencias dictadas por nuestros tribunales.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los _____ (_____) días del mes de _____ del año dos mil diecisiete (2017).